

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio No. ____

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

PROCESO:	Ejecutivo
EXPEDIENTE:	76001-33-33-005-2018-00184-01
EJECUTANTE:	Lina María Valencia González limarva02@hotmail.com
EJECUTADO:	Departamento del Valle del Cauca
ASUNTO	Confirma auto que negó mandamiento de pago

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. ____).

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede la Sala, a decidir el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio que negó el mandamiento de pago en razón a que el título ejecutivo no cumple con las exigencias del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), conforme sostiene la providencia impugnada.

II. ANTECEDENTES

La señora Lina María Valencia González mediante apoderada judicial, presentó demanda ejecutiva contra el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación, pidiendo que se libre mandamiento de pago con la finalidad de obtener el cumplimiento de la obligación dineraria contenida en la Resolución No. 02337 de julio 29 de 2016¹.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 521 de agosto 28 de 2019², el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, negó el mandamiento de pago solicitado. Consideró en síntesis que, el título ejecutivo debe contener los requisitos de forma y de fondo consagrados en el artículo 422 del Código General del Proceso (CGP), consistentes en obligaciones expresas, claras y exigibles que provengan de una sentencia u otra providencia judicial proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

Señaló además que, dentro de los requisitos formales que se deben cumplir, se requiere que el documento que se aporte como recaudo ejecutivo, constituya plena prueba en contra del deudor en lo relativo a su autenticidad.

Consideró que, en la jurisdicción contenciosa administrativa se exige el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 297 del CPACA, el cual señaló claramente los documentos que constituyen el título ejecutivo, entre los que se encuentran las copias

¹ Ver folios 6 a 9.

² Ver folios 47 a 48.

auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria y que corresponden al primer ejemplar.

Concluyó indicando que, si bien el ejecutante aportó copia simple del título ejecutivo contenido en el acto administrativo, este no cumple con las exigencias legales referidas.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la ejecutante presentó recurso de apelación, argumentando en síntesis que, la decisión del *a quo* vulnera los artículos 25 y 29 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto que afecta patrimonialmente a la demandante, toda vez que luego de ser subsanado el medio de control que inicialmente presentó, transcurrieron diez (10) meses para proferir la decisión.

Argumentó que, los términos se vencieron el 29 de julio de 2019, por lo que ya no podrá volver a presentar la demanda ejecutiva y que, si la decisión se hubiera proferido a finales del año 2018 o a comienzos del 2019, hubiera tenido la oportunidad de solicitar copia de la resolución, con constancia de ejecutoria y ser primera copia que preste mérito ejecutivo.

Igualmente, señaló que también hubiese podido adelantar la conciliación para la declaración de pago de la sanción por mora en el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales a que se refiere la demanda.

Finalizó manifestando que, no entiende por qué el juez se demoró tanto en emitir el pronunciamiento que afecta los derechos fundamentales de la ejecutante, pues reitera que, de haberlo hecho en término, podría haber realizado las diligencias correspondientes para lograr los pagos.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Problema Jurídico

El asunto que se discute, se contrae a establecer si se debe confirmar o revocar la decisión del juez de primera instancia que negó el mandamiento de pago por no cumplir con los requisitos formales y de fondo del título ejecutivo.

5.2. Tesis

La Sala confirmará la providencia recurrida, pero por las razones expuestas en este auto, toda vez que, si bien le asiste razón al *a quo* en determinar que el título ejecutivo que emana de un *acto administrativo* debe allegarse en original o copia auténtica, tal y como lo ha señalado en otras decisiones análogas y conforme lo considera la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Sin embargo, revisadas las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que, aunado a lo anterior, no se aportó con la demanda la constancia de ejecutoria del acto administrativo que considera la parte demandante constituye el título ejecutivo, lo que aquí sí, por sí solo es suficiente para negar el mandamiento de pago, teniendo en cuenta que dicha constancia hace parte integral del título ejecutivo y es un requisito sustancial de conformidad con los artículos 215 y 297 del CPACA.

Para resolver el problema jurídico, es pertinente realizar un recuento normativo y jurisprudencial acerca de **i)** los requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo, **ii)** el valor probatorio de las copias en el proceso ejecutivo y, **iii)** luego aplicarlo al caso concreto.

- **Del título ejecutivo y los requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo para librar mandamiento de pago:**

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explicará a continuación.

Para que sea viable librar mandamiento de pago, el juez de la ejecución está obligado a estudiar los documentos aportados con la demanda a efectos de establecer jurisdicción, competencia y, que las obligaciones reclamadas sean expresas, claras y exigibles. Igualmente se debe analizar lo relativo a la validez probatoria de los documentos aportados conforme a las reglas del CGP.

El artículo 422 del CGP³ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librándolo mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

En cuanto a los requisitos formales, el artículo 430 del CGP dispone que *“los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso*. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución, según sea el caso.

Respecto a la forma de hacer valer la ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo, la doctrina ha dicho⁴:

³ **Artículo 422. Título ejecutivo.** Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁴ López Blanco Hernán Fabio, “Código General del Proceso - parte especial”, pág. 426. Dupre Editores Ltda. 2018.

“Se trata de un punto de especial interés debido a que de forma precisa se delimitan dos campos de acción en lo que con la defensa del ejecutado concierne; el primero de ellos se refiere a los requisitos formales del título ejecutivo, es decir todo lo que atañe con la observancia de las exigencias previstas en el art. 422 del CGP. El segundo es el atinente con la defensa de fondo del demandado, o sea el cuestionamiento de la existencia total o parcial de la obligación por la cual se le ejecuta, lo que en la práctica es usual confundir y no es extraño observar que el abogado de la parte ejecutada emplea la excepción “perentoria” de inexistencia de los requisitos formales del título, ejemplo, porque la obligación no es clara, no proviene del demandado o no es exigible, lo que es un error debida a que aquí no se cuestiona la obligación en sí, si no la idoneidad del título ejecutivo”.

Por otra parte, el Consejo de Estado – Sección Cuarta, en providencia de mayo 31 de 2018, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, recordó cuáles son los requisitos sustanciales y formales del título ejecutivo:

“De conformidad con la jurisprudencia de esa Corporación, los requisitos sustanciales del título ejecutivo son aquellas que tienden a demostrar que las obligaciones contenidas en los documentos son claras, expresas y exigibles.

*Por lo tanto, si la excepción se declaró probada porque el título base de recaudo no daba cuenta de obligaciones claras y exigibles, es evidente que el pronunciamiento de la autoridad judicial demandada versó sobre los **requisitos sustanciales** del título ejecutivo.*

*Siendo así, el tribunal no desconoció el artículo 430 del Código General del Proceso, pues esa norma prohíbe pronunciarse sobre los **requisitos formales, que están relacionados con la autenticidad y el origen de los documentos**, que pretendan hacerse valer como título ejecutivo. Si se analiza la providencia judicial cuestionada, se concluye que, para declarar probada la excepción, el tribunal no hizo un análisis de ese tipo.”*

Así mismo, la Sección Tercera – Subsección B, CP: Ramiro Pazos Guerrero, en providencia de julio 22 de 2019⁵, afirmó:

“- Las características del título ejecutivo

1. El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil señala que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él.

2. En ese contexto, la obligación contenida en el título ejecutivo debe aparecer manifiesta en la redacción misma del título, esto es, el crédito - deuda debe estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones, por lo que la obligación debe estar determinada, ser fácilmente inteligible, entenderse en un solo sentido y no estar pendiente de un plazo o condición.

3. De otra parte, el título ejecutivo puede ser: i) singular cuando la obligación está contenida o constituida por un solo documento, o ii) puede ser compleja cuando se encuentra integrada por un conjunto de documentos, por ejemplo, un contrato, junto con los certificados de disponibilidad presupuestal, las actas recibo de las obras, servicios o bienes contratados y el acta de liquidación, etc.

⁵ Radicación número: 23001-23-31-000-2009-00277-02 (60613)

4. Ahora, cuando el título sea complejo, se deben valorar en conjunto la totalidad de los documentos allegados junto con la demanda⁶, con miras a establecer si constituyen prueba idónea de la existencia de una obligación a favor del ejecutante.

5. En cuanto a los requisitos formales, al tenor del precitado artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, el título ejecutivo debe estar contenido en documentos que den cuenta de la existencia de la obligación, los cuales deben ser auténticos y emanar del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, de conformidad con la ley.

6. En estas circunstancias, pueden ejecutarse las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles que se encuentren contenidas en un único documento –título ejecutivo singular- o aquellas que obren en varios de ellos –título ejecutivo complejo-, dichos documentos deben ser auténticos y emanar del deudor o de una providencia judicial.”

En cuanto a los requisitos sustanciales, el Consejo de Estado en providencia del 26 de febrero de 2014, ha manifestado lo siguiente⁷:

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

El artículo 297 del CPACA⁸ establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato - que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual - o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

⁶ C. de E. Sección Cuarta. Sentencia de febrero 26 de 2014, dentro del expediente con radicación: 25000-23-27-000-2011-00178-01(19250). CP: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

⁷ C. de E. Sección Cuarta, CP: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S. A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

⁸ **Artículo 297. Título Ejecutivo.** Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

- **Valor probatorio de las copias simples en el proceso ejecutivo – Reiteración jurisprudencial:**

En providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, CP. Danilo Rojas Betancourth, de mayo 18 de 2017⁹, aclaró respecto de la sentencia de unificación del valor probatorio de las copias, que dicha providencia dejó por fuera de la presunción de autenticidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de aquellos documentos que funjan como título para una ejecución, lo anterior en los siguientes términos:

“(…) Ahora, cabe advertir que esta Corporación ha establecido que todos los documentos que constituyan título ejecutivo deben ser aportados al plenario en original o en copia auténtica, tal como lo prescribe el inciso segundo del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, el cual destaca que la valoración de copias simples no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley¹⁰.

1. Si bien es cierto que la Sección Tercera a través de sentencia de unificación de fecha 28 de agosto de 2013 reconoció el valor probatorio de las copias simples como una manifestación de los principios constitucionales de la confianza y la buena fe, es necesario recordar que dicha providencia dejó por fuera de la presunción de autenticidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a aquellos documentos que funjan como título para una ejecución. Frente a lo narrado, esta Corporación argumentó¹¹:

No quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. **En efecto, existirán escenarios -como los procesos ejecutivos en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley** (ver el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohija en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (ver contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del C.C.A., norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de 2011 -nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (énfasis fuera del texto).

2. En consonancia con el precedente citado, esta Corporación en reciente pronunciamiento reafirmó la necesidad de que en los procesos ejecutivos el título que fundamenta la expedición de un mandamiento de pago sea allegado al plenario en original o en copia auténtica. Al respecto, dijo este órgano jurisdiccional:

Para la Sala resulta pertinente realizar una precisión en cuanto al alcance de la sentencia de unificación jurisprudencial cuyos apartes se vienen de transcribir, puesto que si bien se estableció en ella que en tratándose de procesos ejecutivos el título de recaudo que soporte la obligación debe obrar en original o en copia auténtica en los eventos autorizados por la ley, no es menos cierto que dicha restricción al ámbito de aplicación de la jurisprudencia transcrita solo opera para aquellos procesos que se tramiten de esa forma, esto es para los denominados procesos ejecutivos, excluyéndose por lo tanto de tal carga a los procesos ordinarios (...)¹².

⁹ Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00078-01(53240)

¹⁰ Disposición concordante con el inciso primero del artículo 246 del C.G.P, el cual consagra que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.

¹¹ C. de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, CP. Enrique Gil Botero.

¹² C. de E. Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de febrero 24 de 2016, Exp. 41310. CP. Marta Nubia Velásquez Rico.

5.3. Caso Concreto:

En el presente asunto, la parte ejecutante pretende que se libre mandamiento de pago por la suma de \$14.772.381 pesos, conforme a lo decidido en la Resolución No. 02337 de julio 29 de 2016, mediante la cual se ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales reconocidos por la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca.

A través de auto interlocutorio No. 521 de agosto 28 de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo de Cali resolvió negar el mandamiento de pago solicitado, en razón a que el título ejecutivo no cumple con las exigencias del numeral 4 del artículo 297 del CPACA, en concordancia con los requisitos del artículo 422 del CGP.

Consideró la parte recurrente en síntesis que, la decisión vulnera los artículos 25 y 29 de la Constitución Política de Colombia afectando patrimonialmente a la demandante, puesto que luego de haber subsanado la demanda transcurrieron diez (10) meses para proferir la decisión.

Que debido a que los términos se vencieron el 29 de julio de 2019, no podrá volver a presentar la demanda ejecutiva y que, si la decisión se hubiera proferido a finales del año 2018 o a comienzos del 2019, hubiera tenido la oportunidad de solicitar copia de la resolución con constancia de ejecutoria y ser primera copia que preste mérito ejecutivo. Igualmente, que también hubiese podido adelantar la conciliación para la declaración de pago de la sanción por mora en el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales a que se refiere la demanda.

Manifestó que, no entiende por qué el juez se demoró tanto en emitir el pronunciamiento que afecta los derechos fundamentales de la ejecutante, pues reitera, de haberlo hecho en término, podría haber realizado las diligencias correspondientes para lograr los pagos.

Ahora bien, en los procesos ejecutivos para que sea viable librar mandamiento de pago, el juez de ejecución está obligado a estudiar los documentos aportados con la demanda a efectos de establecer jurisdicción, competencia y, que las obligaciones reclamadas sean expresas, claras y exigibles.

El artículo 297 del CPACA, señala claramente que son título base de recaudo ejecutivo, los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en donde se reconozca un derecho o una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de una autoridad administrativa, los cuales deben ser allegados en copia auténtica con la anotación de que corresponden al primer ejemplar.

Con ellos, se pretende evitar que se le cobre varias veces a la autoridad administrativa una suma de dinero originada en un único acto administrativo, situación que también se puede predicar respecto de los cobros que las entidades inician contra los particulares, en aras de garantizar que a éstos tampoco se les inicien distintos procesos ejecutivos fundamentados en un mismo título ejecutivo.

Así lo precisó el Consejo de Estado en providencia del 19 de julio de 2017¹³:

“La circunstancia de que los actos administrativos que se aportan al proceso como título base de recaudo ejecutivo, se aporten en copia auténtica con constancia de ser el primer ejemplar, es una de las nuevas exigencias que consagra la Ley 1437 de 2011, para

¹³ Consejo de Estado, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad: 25000-23-36-000-2015-02234-01(57348).

viabilizar la orden de pago. Dicha exigencia obedece, "por una parte, a la imposibilidad de aducir al proceso ejecutivo el original del respectivo documento y, por otra parte, a la imperiosa necesidad de brindar al obligado la seguridad de que no va a ser ejecutado de nuevo, con fundamento en el mismo título, en oportunidad posterior", pero debe tenerse en cuenta que la obligación de aportar los actos administrativos que integran el título ejecutivo con la constancia de ser la primera copia solo es exigible cuando la obligación contenida en el título se satisface en un solo momento, pues cuando la obligación debe ser satisfecha por el deudor en distintas oportunidades no es viable exigir la constancia de ser la primera copia, pues es obvio que el acreedor necesita el título, para luego reclamarla por la vía ejecutiva, cuantas veces el deudor incumpla la obligación y ésta sea exigible." (Subraya la Sala).

Así las cosas, al estudiar el documento aportado como base de recaudo contenido en la Resolución No. 02337 de julio 29 de 2016, encuentra la Sala que como bien lo manifestó el *a quo*, este no cumplió con los requisitos establecidos en la ley para constituirlo como título ejecutivo, por lo tanto, no es procedente proferir mandamiento de pago.

Por lo anterior, la Sala confirmará el auto interlocutorio mediante el cual el juez *a quo* negó el mandamiento de pago, pero por los argumentos planteados en la presente providencia.

VI. DECISIÓN

En consecuencia, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

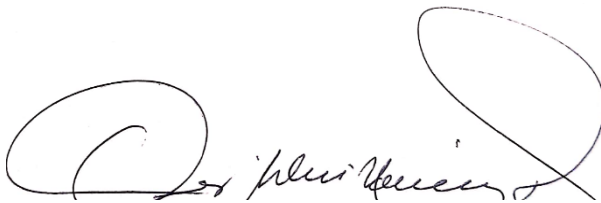
RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 521 del 28 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó el mandamiento de pago solicitado, pero por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notificada y ejecutoriada la presente decisión, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen, para lo de su competencia, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia¹⁴.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,



OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA



OMAR EDGAR BORJA SOTO



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

¹⁴ VoBo Secretario
Proyectó Andrés M.